

AGENDA GLOBAL

Montevideo Uruguay - Jueves 7 de junio 2007 - N° 6 - Distribuido con *la diaria*



Los gobernantes de (en orden alfabético) Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia se reúnen en estos días en el balneario alemán de Heiligendamm.

El Grupo de los Ocho (G-8) no comprende a los países más poblados (no están China, ni India o Indonesia), ni a los más ricos (no están Suiza, ni Arabia Saudita), ni a las potencias nucleares (no están Pakistán, ni Israel), ni a ningún otro criterio objetivable. Pero al autoconvocarse y definirse como el “club de los poderosos” y al mantener sus reuniones en secreto, los ocho dirigentes logran concentrar sobre su ritual reunión anual la atención de quienes creen que algo anda mal en el mundo (que somos muchos), ya sea porque se los culpa de querer definir la suerte de los demás a puertas cerradas y sin consultar o porque como líderes democráticos que son se espera de ellos que resuelvan todo lo que anda mal en el mundo.

Entre los miles de manifestantes congregados en la ciudad vecina de Rostock ante la imposibilidad de llegar al balneario por tierra o por las aguas del Báltico, hay quienes creen que el problema es la globalización –incluyendo algunas decenas de “violentistas” sobre los que se concentra desproporcionadamente la atención de la televisión– y hay quienes aspiran a que los beneficios de la globalización lleguen a los pobres del mundo. Unos y otros coinciden, por acción o reacción, en atribuir al G-8 un rol primordial para bien o para mal sobre el destino de todos.

La mayoría de los ciudadanos de los ocho países representados en Heiligendamm cree que una proporción sustancial de los impuestos que pagan se transfieren a los países pobres bajo la forma de ayuda, préstamos blandos, beneficios comerciales y las muy comentadas cancelaciones de deuda. Si la pobreza persiste, de alguna manera debe ser culpa de los pobres mismos por su pereza, ignorancia, algún efecto del clima tropical, o por culpa de sus gobiernos ineficaces y corruptos.

Grupos solidarios más esclarecidos, la mayoría de los ciudadanos de los

¿Quién manda aquí, los Ocho o los *jengüís*?

Roberto Bissio

países del Sur, y los presidentes del G-5 (Brasil, China, India, México y Sudáfrica), invitados a compartir algunas horas de reunión –y la foto– con los Ocho, creen en cambio que los países ricos no están haciendo lo suficiente, no están cumpliendo con las metas de ayuda a las que se comprometieron y continúan trabando con aranceles y otras barreras el comercio de los países en desarrollo, subsidiando a sus productores agrícolas en desmedro de los campesinos pobres.

Nadie niega que los pobres necesitan ayuda y solidaridad. Lo que pocos dicen es que cada año los pobres destinan miles de millones de dólares... ¿en ayudar a los países ricos!

Este dinero se fuga como pago de deudas gubernamentales, transferencias del sector privado y –aún más importante– a través de facturación fraudulenta del comercio, evasión de impuestos y fuga de capitales. El flujo financiero neto, descontando la ayuda, la inversión extranjera directa y los nuevos préstamos es sistemáticamente del Sur al Norte. Estos egresos socavan la movilización de los recursos nacionales, rebajan la inversión local, debilitan el crecimiento y desestabilizan a los países haciéndolos más dependientes del ingreso de recursos externos inciertos.

John Christensen, un ejecutivo bancario especializado en operaciones *offshore* en Jersey (Reino Unido) dice en un artículo que acaba de publicar en *The Guardian*: “Los ciudadanos más ricos del mundo han creado –y están extendiendo– una economía *offshore*

secreta y paralela en la que operan fuera de todo control democrático”.

A medida que se liberalizaron los mercados financieros globales, a partir de los años ochenta, banqueros, contadores y abogados se dedicaron a seducir a los ricos, los llamados *jengüís* o, en inglés, *hen-wees*, que es como suena la sigla HNWIs de “high network worth individuals”, o sea... tipos muy ricos.

Los *jengüís* no quieren pagar impuestos y Christensen se dedicaba a ayudarlos: “Procesábamos (en Jersey) instrucciones de Londres, Suiza o Nueva York sobre cuentas cuyos misteriosos titulares se ocultaban, utilizando firmas de papel en por lo menos tres jurisdicciones diferentes. Un cliente, operador de bolsa, manejaba operaciones fraudulentas por cientos de millones de dólares. Otros burlaban a los recaudadores de impuestos con trucos de facturación, vendiendo edificios prefabricados a Trinidad por menos de dos dólares cada uno o importando papel higiénico de China a 4.000 dólares el kilo”. Así, las ganancias no quedaban ni en China ni en Trinidad ni en Inglaterra... sino en Jersey, donde no pagan impuestos.

A mediados de los noventa, cuenta Christensen, los grandes bancos privados se trazaron la meta de transferir a sus filiales *offshore* a la mayoría de los *jengüís* (para serlo hay que tener cuentas de más de un millón de dólares) en una década. Eran ocho millones de *jengüís*, entonces, y hoy se calcula que son por lo menos doce. O sea doce billones (millones

de millones) de dólares. La mitad del comercio mundial se canaliza por paraísos fiscales.

En una década los bancos cumplieron su meta y movilaron a doce millones de millonarios. Sin embargo la meta que se trazaron en el año 2000 los gobiernos del mundo de reducir la pobreza extrema a la mitad en el 2015 está tan atrasada que organizaciones como Social Watch han calculado que al ritmo actual una mínima dignidad humana recién se logrará en África subsahariana dentro de un siglo.

Jeffrey Sachs, el economista de Harvard que asesoró los ajustes estructurales y privatizaciones en Bolivia, Polonia y la ex Unión Soviética en los noventa y hoy desde la Universidad de Columbia se dedica a estudiar la pobreza en el mundo, ha calculado que para lograr los Objetivos del Milenio se necesitaría un gasto adicional anual de unos 100.000 millones de dólares. Si los capitales colocados *offshore* por los *jengüís* tuvieran un rendimiento anual de apenas diez por ciento y si estas ganancias pagaran un impuesto a la renta bajo, digamos del veinticinco por ciento, la recaudación impositiva adicional sería de 300.000 millones de dólares. ¡Tres veces más que lo necesario para que nadie se vaya a dormir con hambre!

Sin embargo, como bien dijo el presidente Bush, “los realmente ricos se las ingenian para no pagar impuestos”. Éste es el problema real del mundo globalizado. No la concentración de poder en unos pocos, sino la renuncia de estos autoproclamados líderes globales a ejercer la primera función de un gobernante que es la de cobrar impuestos y, en democracia, hacerlo con justicia.

Si los Ocho dedicaran unos minutos de su tiempo a estudiar cómo enfrentar este crimen organizado –después de todo fue por evasión de impuestos que Al Capone terminó preso– se darían cuenta que sin aumentar impuestos ni afectar sus presupuestos podrían sacar de la pobreza a mil millones de personas en un par de años. ¿O acaso su poder es incapaz de enfrentar a un puñado de *jengüís*? ■

La histórica relación entre acreedores y deudores ha sido puesta en entredicho. La ilegitimidad de la deuda externa es hoy considerada como un argumento de denuncia por parte de los deudores. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa impulsa un proceso de auditoría de la deuda externa con el propósito de identificar los préstamos ilegítimos y repudiarlos. Para los principales acreedores y las instituciones financieras internacionales éste era un tema tabú. Sin embargo, una posición disidente surgió el año pasado desde el propio seno del poder.

Noruega, miembro permanente del Club de París*, rompió en 2006 con la concepción tradicional de este grupo en materia de deuda externa. El ministro de Desarrollo Internacional, Erik Solheim, anunció el 2 de octubre pasado la cancelación de forma unilateral y sin condiciones de deudas por ochenta millones de dólares que mantenían cinco países: Ecuador (ver cuadro), Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leona. El gobierno noruego admitió que dichos préstamos fueron irresponsables y estuvieron motivados más en intereses internos que en el análisis objetivo de las necesidades de desarrollo de los países destinatarios

NORUEGA, MIEMBRO PERMANENTE DEL CLUB DE PARÍS, ROMPIÓ EN 2006 CON LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE ESTE GRUPO EN MATERIA DE DEUDA EXTERNA.

El tema interno en cuestión fue la Campaña de Exportación Naviera promovida por el gobierno noruego entre 1976 y 1980. La exportación de ciento cincuenta barcos se realizó primordialmente para asegurar el empleo en la industria de la construcción naviera doméstica que se encontraba en crisis. Por este motivo, parece justo que Noruega acepte la responsabilidad compartida por las deudas derivadas de estos acuerdos.

* El Club de París es un foro informal de países acreedores cuyo rol es coordinar formas de pago y renegociaciones de deudas. Entre sus diecinueve miembros permanentes figuran los principales países industrializados del mundo.

DEUDA EXTERNA ILEGÍTIMA

Noruega marca el camino

María José Romero

El financiamiento responsable es hoy uno de los principales temas de discusión en los foros internacionales. La decisión de Noruega de cancelar las deudas de cinco países en desarrollo rompió con la tradicional concepción de los acreedores y sentó un precedente difícil de soslayar.

Con esta decisión, Noruega rompió filas con el cartel de acreedores nucleados en el Club de París, que en su mayoría niegan haber otorgado préstamos de forma irresponsable o por razones políticas. Los países acreedores se han limitado a reclamar el cumplimiento total del servicio de la deuda, a expensas muchas veces de las posibilidades de crecimiento de los países más pobres. Por tanto, esta decisión es de fundamental importancia en relación a la ilegitimidad y responsabilidad de la deuda externa. “La cancelación de estas deudas tendrá efectos sobre nuestra forma de pensar acerca de una actividad crediticia responsable en el futuro. Al cancelar estas deudas, deseamos dar lugar a un debate internacional en materia de responsabilidad de prestamistas”, expresó Solheim.

Un ingrediente también extraordinario de esta decisión es que Noruega no contabilizó esta cancelación como asistencia oficial para el desarrollo ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), siendo que típicamente las naciones acreedoras contabilizan las operaciones de cancelación en esta categoría. La práctica usual produce el efecto de inflar artificialmente los presupuestos de ayuda económica y mostrar que se está otorgando mayor asistencia que la real.

Numerosas organizaciones sociales que se movilizan contra la deuda externa han manifestado durante años que las deudas contraídas por dictadores para proyectos fracasados, o donde el dinero desapareció por prácticas corruptas, son ilegítimas y no constituyen la responsabilidad de

la población. (Ver “Deuda externa: la opción del repudio” en Agenda Global N° 3, jueves 17 de mayo de 2007.)

El gobierno noruego recibió presiones internas y externas a favor de esta decisión. Una activa campaña liderada por organizaciones locales solicitaba que el país adoptara una postura audaz en este tema.

Al cancelar estos préstamos, Noruega se encuentra en posición de exigir acciones por parte de otros acreedores e instituciones internacionales. Como accionista del Banco Mundial, solicitó un estudio sobre la deuda ilegítima y reservó recursos para respaldar esta investigación. Actualmente lidera también el debate sobre las condicionalidades que, en materia de políticas, las instituciones de Bretton Woods ligan a sus préstamos.

AL CANCELAR ESTOS PRÉSTAMOS NORUEGA SE ENCUENTRA EN POSICIÓN DE EXIGIR ACCIONES POR PARTE DE OTROS ACREEDORES E INSTITUCIONES INTERNACIONALES.

Pero pese a toda la evidencia en materia de deuda ilegítima y el perjuicio causado por las condicionalidades, hoy el Banco Mundial y el FMI siguen mostrándose incapaces de tomar una decisión como la de Noruega. ■

María José Romero es politóloga e investigadora de Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en el Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

ECUADOR: UN PUNTO DE INFLEXIÓN. En el marco de la Campaña de Exportación Naviera de Noruega, la empresa privada Flota Bananera Ecuatoriana S.A. compró a un astillero noruego, entre 1976 y 1980, cuatro barcos frigoríficos por un valor de 56,9 millones de dólares, financiados por el gobierno del país escandinavo con fondos de ayuda al desarrollo y con aval del gobierno ecuatoriano.

Cuando en 1987 esta empresa quiebra, el saldo de la deuda pendiente de pago por valor de treinta y un millones de dólares fue asumido por el Estado ecuatoriano. De este saldo quedaron pendientes 13,6 millones que fueron objeto de varias renegociaciones en el Club de París. Parece increíble, pero en 2001 esta deuda se remontó a más de 51 millones, muy cerca del valor original de los cuatro barcos comprados, cuyo destino hoy se desconoce.

En 1998 las autoridades noruegas reconocieron que esta operación no contribuyó al desarrollo de los destinatarios, por lo que decidieron condonar el cien por ciento de estas deudas a los países pobres altamente endeudados, únicos beneficiarios de los programas de ayuda internacional. Ecuador y Jamaica, por ser países de ingresos medios, quedaron fuera de esta decisión. Su inclusión suponía un reconocimiento implícito de ilegitimidad, contrario a las “reglas del Club de París”.

En noviembre de 2002, el Tribunal sobre Leyes y Moral, organizado por la Campaña Noruega para la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo, hizo la primera denuncia de la campaña de exportación de barcos a Ecuador, pidiendo su anulación total

por ser ilegítima. Alentado por la campaña noruega, el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador hizo lo propio ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, solicitando una auditoría de esta deuda y su posterior anulación. Luego de su investigación, la Comisión exhortó a las autoridades ecuatorianas a que requiriesen por vía diplomática al gobierno de Noruega la extinción total de esta deuda, por considerarla ilegítima con los siguientes argumentos: a) el crédito no se dio para ayudar a Ecuador sino por la necesidad de Noruega de salvar sus dársenas; b) no hubo evaluaciones sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto por parte del gobierno noruego; c) los barcos han desaparecido y nadie sabe dónde están; y d) el crecimiento de la deuda ecuatoriana con Noruega sólo se explica por las condiciones onerosas de las renegociaciones y los retrasos, en el marco de los acuerdos con el Club de París.

Hasta ahora, la posición de los sucesivos gobiernos ecuatorianos frente al tema de la deuda con Noruega y a la resolución de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción ha sido la de evitar cualquier conflicto, con el argumento de que este reclamo dañaría la imagen del país y restringiría la inversión extranjera. Pero la llegada de Rafael Correa a la presidencia en enero de este año marca un punto de inflexión en esta lógica. Uno de sus objetivos es identificar la deuda que, sin discusión posible, puede dar lugar a una denuncia y a un repudio. Una comisión de auditoría, integrada por expertos nacionales e internacionales, comenzará a trabajar en este sentido. ■





El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acaba de inaugurar Barralcool, la primera planta integrada de biocombustibles que producirá etanol de caña de azúcar y biodiésel de semillas oleaginosas. El programa brasileño de bioetanol se remonta al menos a la crisis del petróleo de los años setenta, y ha constituido el mercado de biocombustibles más avanzado del mundo durante décadas. Actualmente, Brasil tiene cerca de trescientas plantas de etanol de caña de azúcar en funcionamiento, y sesenta o más en construcción. La creciente demanda mundial de biocombustibles le ha dado la oportunidad no solo de expandir esta actividad sino también de salvar su decadente industria de soja convirtiendo este producto en otro biocombustible, el biodiésel.

El gobierno de Lula aprobó una ley que obliga a que todas las ventas comerciales de diésel incluyan dos por ciento de una mezcla de biodiésel de soja, semillas de girasol y semillas de ricino, y cinco por ciento para 2013. Algunos cientos de estaciones de gasolina ya ofrecen estas mezclas. Brasil cuenta con unas diez plantas de biodiésel en funcionamiento y tiene otras cuarenta en construcción.

Brasil produjo 15.900 millones de litros de bioetanol en 2005, más de un tercio de la oferta mundial. Esto lo coloca en segundo lugar después de Estados Unidos. El bioetanol de Brasil es el único programa de biocombustibles de gran escala capaz de crecer sin subsidios gubernamentales. En cambio, el bioetanol de Estados Unidos, derivado del maíz, cuenta con voluminosos subsidios.

Brasil se prepara para duplicar su producción de bioetanol en la próxima década. El mercado de futuros aumentó sesenta y dos por ciento en 2005, gracias a la creciente demanda de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, India y otros países. También se dispone a expandir significativamente la producción de biodiésel para exportación, utilizando soja, aceite de palma y aceite de ricino.

¿Bioetanol sostenible?

El bioetanol de Brasil suele ser presentado como modelo de una producción sostenible de biocombustibles, y esto parece haber sido confirmado por un informe de la Agencia Internacional de Energía que analiza la bioenergía y el comercio de biocombustibles en el ámbito internacional. El informe "Sostenibilidad del bioetanol de Brasil", publicado en octubre de 2006, concluye que, en general, la producción de etanol de caña de azúcar tal como se practica en ese país es "ambientalmente sostenible".

República de los Biocombustibles de Brasil

Mae-Wan Ho

La creciente industria de los biocombustibles de Brasil representa una grave amenaza para la supervivencia del planeta y de sus habitantes.

En el documento, los biocombustibles son evaluados según su "balance de energía", es decir, las unidades de energía producidas por cada unidad de energía de insumo, y según su "ahorro de carbono", es decir, el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero que se evita mediante la producción y el uso de biocombustible, en comparación con la misma cantidad

EL GOBIERNO DE LULA APROBÓ UNA LEY QUE OBLIGA A QUE TODAS LAS VENTAS COMERCIALES DE DIÉSEL INCLUYAN DOS POR CIENTO DE UNA MEZCLA DE BIODIÉSEL DE SOJA, SEMILLAS DE GIRASOL Y SEMILLAS DE RICINO, Y CINCO POR CIENTO PARA 2013.

de combustible fósil.

El balance de energía del etanol derivado de la caña de azúcar se estima en 8,3 en promedio, pero podría llegar a 10,2 en el mejor de los casos. Esta cifra supera por lejos el balance de energía de cualquier otro biocombustible, en particular los producidos en regiones templadas. El ahorro de carbono, situado entre ochenta y cinco y noventa por ciento, también es mayor que el de cualquier otro biocombustible.

El informe fue encargado por SenterNovem, la Agencia Holandesa para el Desarrollo Sostenible y la Innovación, y elaborado por el Instituto Copérnico (Universidad de Utrecht) y la Universidad de Campinas (Brasil). Los resultados son significativos para la exportación de etanol de caña de azúcar de Brasil. Europa sería el principal importador.

El relativo éxito del bioetanol de caña de azúcar se deriva del prolífico ritmo de crecimiento del cultivo en el clima tropical de Brasil y de un proceso de producción de ciclo cerrado, en el que la energía necesaria para la refinación y destilación procede del residuo de la quema de la caña de azúcar, por lo tanto no se necesitan biocombustibles fósiles.

¿Pero es realmente sostenible? El informe expone una serie de criterios de sostenibilidad elaborados por una comisión parlamentaria holandesa, entre ellos los siguientes: un ahorro de carbono de treinta por ciento o más en 2007, que aumente a cincuenta por ciento o más para 2011; medidas para proteger la biodiversidad en zonas sensibles (fija un límite de cinco por ciento para la conversión de bosques en plantaciones en un plazo de cinco años); inexistencia de efectos económicos negativos sobre la región o el país; respeto de los derechos laborales, los derechos humanos básicos, los derechos de propiedad y de uso, y las leyes anticorrupción; cumplimiento con las leyes ambientales en materia de disposición y gestión de residuos, y uso de organismos modificados genéticamente.

Entre las principales preocupaciones se cuentan el impacto ecológico y social, incluida la seguridad alimentaria. Todavía no está claro qué efecto tendrá el uso de tierra adicional para el cultivo de caña de azúcar sobre la biodiversidad, ni si competirá por tierras necesarias para el cultivo de alimentos. El informe no aborda el tema del bienestar social, en un país donde muchos derechos humanos y el derecho a la tierra no están seguros. Tampoco incluye consideraciones sobre el impacto de esta industria en la salud de los trabajadores y de la población en general, ni tampoco sobre su impacto en el carbono

orgánico del suelo, en particular como resultado de los cambios en el uso de la tierra.

La caña de azúcar ha invadido la Amazonia, pero mucho más el bosque atlántico y el Cerrado, un ecosistema parecido al de la sabana, con una diversidad única. Dos tercios del Cerrado ya han sido destruidos o degradados. Además, la caña de azúcar no constituye un hábitat para las aves. Si este cultivo se expande, el panorama para la biodiversidad mundial será muy oscuro.

La opción del biodiésel derivado de la soja es, por cierto, la más perjudicial, no solo por su bajo balance de energía e igualmente bajo ahorro de carbono, sino también porque el monocultivo de soja es responsable de la destrucción de la Amazonia más que ninguna otra actividad, incluidas la ganadería y la industria maderera. También está vinculado con la destrucción de los bosques brasileños del Atlántico.

Posible catástrofe para el clima terrestre y la biodiversidad

La Amazonia es uno de los mayores sumideros de carbono de la Tierra. Su pérdida provocaría un enorme aumento de las emisiones de carbono y contribuiría a subir el promedio de la temperatura terrestre en 0,6 a 1,5 grados centígrados por encima del incremento ya previsto para este siglo por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Los científicos están cada vez más preocupados acerca de un umbral de deforestación más allá del cual todo el ecosistema se derrumbaría y comenzaría a morir. El motivo es la alteración del ciclo del agua. Gran parte de las precipitaciones fluviales que nutren las selvas se recicla: los árboles absorben el agua y la devuelven a la atmósfera mediante la evapotranspiración. Se estima que siete cuatrillones de toneladas de agua son recicladas de esta forma, lo cual ayuda a enfriar la atmósfera por encima de las selvas.

Este ciclo del agua, que sustenta la agricultura en la región y en otras partes, podría destruirse. Esto afectaría el "cinturón cerealero" de Estados Unidos. Además, una sequía permanente sobre la cuenca del río Amazonas reduciría gravemente el ya menguante suministro mundial de alimentos, al mismo tiempo que emitiría a la atmósfera grandes cantidades de carbono, en una espiral catastrófica de calentamiento terrestre que condenaría a la extinción a la mayoría de las especies que habitan el planeta, incluida la nuestra. ■

Mae-Wan Ho es directora y cofundadora del Institute of Science in Society de Gran Bretaña, directora de la revista *Science in Society* y asesora científica de Third World Network (TWN).

Este artículo se publicó en *Science in Society*, N° 33, primavera de 2007.

Traducción: María Laura Mazza

George W. Bush asombró al mundo el pasado jueves 31 de mayo con una aparente vuelta en "U" sobre el cambio climático. Por primera vez, en algo parecido a la conversión de un ateo, reconoció que era un problema serio y dijo que Estados Unidos podía unirse a otros países para fijar metas de reducción de los gases de efecto invernadero, que provocan el recalentamiento terrestre.

Antes de esto, el presidente de Estados Unidos vivía en un estado de negación. Por largo tiempo contradujo la opinión casi consensual de los científicos de que el calentamiento del planeta es una amenaza para la supervivencia humana, se negó a participar en programas mundiales de reducción de emisiones y retiró a su país del Protocolo de Kyoto, el marco de las Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático de una manera cooperativa.

¿A qué se debe, entonces, que la conversión de Bush haya sido recibida con escepticismo por muchos analistas y con enojo por algunos de los principales defensores del clima?

Se debe a que creen que el presidente estadounidense no es sincero y que su propuesta no es más que una treta para evitar una vergüenza esta semana en la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8), integrado por los países más industrializados del mundo y Rusia. La cancillera alemana Angela Merkel, anfitriona de la cumbre, se propuso hacer del cambio climático el principal punto del programa.

Hace poco más de una semana, Bush era presentado una vez más como un paria debido a la oposición de sus funcionarios a un proyecto de declaración del G-8 sobre el cambio climático.

Los alemanes habían establecido dos objetivos clave en el proyecto: que el aumento de la temperatura se mantuviera en un máximo de dos grados centígrados por encima del nivel preindustrial, y que para 2050 las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se redujeran al menos cincuenta por ciento.

En forma separada, la Unión Europea anunció objetivos unilaterales para que sus países miembros redujeran sus emisiones a veinte por ciento por debajo de los niveles de

La conversión de un ateo

Martin Khor

1990. Si otros países industrializados estuvieran de acuerdo, ese porcentaje se elevaría a treinta por ciento.

En los últimos meses, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático —que integran, entre otros, científicos nombrados por el gobierno de Estados Unidos—, publicó una serie de informes en los que reafirmaba la gravedad de la situación y la necesidad de recortes drásticos de emisiones.

Lo que causó desilusión fue la estrategia propuesta por Bush: convocar reuniones de los quince principales emisores —incluso China e India— a fin de fijar “un objetivo de largo plazo para reducir los gases de efecto invernadero” antes del fin de 2008. Muchos consideran que esto es una táctica para evitar la acción inmediata o, peor aún, para subvertir los marcos y procesos internacionales vigentes.

En primer lugar, la iniciativa crearía confusión en la Cumbre del G-8, en la cual los jefes de Estado y de gobierno, salvo Bush, están dispuestos a aceptar los dos objetivos propuestos por Alemania. La propuesta de Estados Unidos de esperar hasta fines de 2008 para que los quince países establezcan metas “de largo plazo” sabotearía los esfuerzos por fijar objetivos clave de manera inmediata dentro del G-8.

En segundo lugar, al declarar que encabezaría un nuevo proceso al convocar a quince países a fijar esos objetivos, Bush resta importancia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Protocolo de Kyoto, que integra esa Convención, establece que los países industrializados deben reducir sus emisiones por debajo de los niveles

de 1990. Cada país tiene un objetivo que cumplir antes de 2012.

Dado que el plazo del Protocolo de Kyoto vence en 2012, se debe establecer pronto un nuevo marco de objetivos y acciones. En general se acepta que los países industrializados, que no han cumplido los objetivos fijados en Kyoto, todavía deben hacerse cargo de la mayor parte del ajuste. Pero Bush parece decidido a trabar el proceso cooperativo de las Naciones Unidas.

Está claro lo que quiere Bush: que los principales emisores de gases de efecto invernadero se comprometan a alcanzar objetivos obligatorios de reducción. Esto significa que países con una población enorme, como China, India y Brasil, deben abatir el total de sus emisiones, aun si estas son pequeñas en relación a su cantidad de habitantes.

El peligro es que aquellos que más han contaminado y siguen contaminando trasladen injustamente la carga del ajuste a aquellos que han contaminado poco y que ya sufren gran parte de las consecuencias del cambio climático.

La propuesta de Bush no solo intenta impedir que el mundo tome medidas que se precisan con urgencia, sino también reemplazar el modelo democrático de responsabilidades compartidas de las Naciones Unidas por otro dominado por una superpotencia, en el que solo participarían unos pocos países, y en el que la distribución de la carga sería injusta. ■

Martin Khor es director de Third World Network (TWN).

Traducción: María Laura Mazza

Banco Mundial

¿El hombre correcto?

En el preciso momento en que el “pacto de caballeros” según el cual Estados Unidos designa al presidente del Banco Mundial y Europa al director gerente del FMI está siendo fuertemente cuestionado en los más diversos sectores, George W. Bush ratificó este privilegio. Y afirmó que su candidato, Robert Zoellick, es el “hombre correcto para este trabajo vital”.

Las organizaciones que reclaman una reforma profunda de la gobernanza del Banco Mundial consideran que la nominación de Zoellick constituye un duro golpe a la campaña por la democratización de la institución y plantea un desafío al Directorio Ejecutivo, al que le reclaman una postura comprometida cuando se pronuncie formalmente sobre el tema a fines de junio.

Más allá de la experiencia y habilidades negociadoras que se le reconocen, sus antecedentes como subsecretario de Estado y representante de Comercio de Estados Unidos lo ubican en la misma línea de pensamiento de su antecesor, el renunciante Paul Wolfowitz, y no parecen avalar la opinión de Bush sobre sus cualidades para conducir una institución dedicada al fomento del desarrollo y el combate de la pobreza.

Un editorial del diario británico *Financial Times* apuntó que “la principal duda es si Zoellick podrá hacer el cambio que demanda pasar de devoto defensor de los intereses de Estados Unidos a servidor confiable de los intereses globales”.

Todo indica que ni los gobiernos europeos ni el cada vez más influyente gobierno chino van a obstaculizar la nominación. Para los europeos tal vez resulte más fácil aceptar en silencio que arriesgarse a perder el poder que poseen en el FMI. Incluso Brasil, que reclamó públicamente una reforma del proceso de selección del presidente del Banco Mundial, apoyó la designación de Bush.

Mientras tanto, la futura tarea de Zoellick, que se comprometió a restaurar la confianza en la institución y exhortó a olvidar el escándalo de nepotismo que hundió a su antecesor, plantea serias interrogantes que serán develadas a partir del 1 de julio. ■

AGENDA GLOBAL

Redactor responsable: Roberto Bissio. **Redactor asociado:** Marcelo Pereira. **Editor:** Alejandro Gómez.

(c) Instituto del Tercer Mundo (ITeM). El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur. www.item.org.uy / item@item.org.uy

